

Imprimir

Hay mementos en la historia donde la democracia parece retroceder. El miedo ocupa el lugar del dialogo, la fuerza pretende reemplazar al consenso y las promesas de orden se utilizan para justificar la concentración del poder. Antonio Gramsci comprendió ese fenómeno hace casi un siglo cuando explico que ningún Estado puede sostenerse únicamente por la coerción, necesita también construir consenso. Cuando un proyecto político deja de persuadir y comienza a gobernar principalmente desde el temor, no demuestra fortaleza; revela la fragilidad de un proyecto que ha perdido la capacidad de convencer.

Gramsci llamo hegemonía a la capacidad de un proyecto político para convertirse en el sentido común de una sociedad. No se trata solo de ganar elecciones o controlar las instituciones; se trata de lograr que la mayoría de las personas considere naturales y justas determinadas ideas sobre la democracia, la igualdad, la libertad o el papel del Estado. La verdadera disputa política no se libra únicamente en los gobiernos sino en las escuelas, los barrios, los sindicatos, las universidades, los medios de comunicaciones y todos aquellos espacios donde se forman las convicciones de la ciudadanía.

Ese es el terreno en el que hoy prosperan las expresiones autoritarias. El fascismo no aparece solo con uniformes o discursos grandilocuentes. También se manifiesta cuando se normaliza la intolerancia, se deslegitima al contradictor, se debilitan las instituciones democráticas y se pretende que la seguridad sustituya a las libertades mientras se debilita la idea misma del Estado como garante de derechos. Su mayor fuerza no proviene de su solidez, sino de la resignación de quienes creen que ya no es posible transformar la realidad.

Es comprensible que frente a ese panorama surjan el miedo y la incertidumbre. Pero la historia enseña que las conquistas democráticas nunca han sido concesiones generosas del poder. Han sido el resultado de pueblos organizados, capaces de defender sus derechos incluso en los momentos más difíciles. La democracia no se protege únicamente en las urnas; se sostiene todos los días en la organización social, en la participación ciudadana y en la construcción permanente de una cultura democrática.

Por eso no partimos de cero. En estos años Colombia conoció una manera distinta de

entender la acción pública, una democracia que amplió derechos, dignificó el trabajo y colocó a las personas en el centro de las decisiones de Estado. Se construyeron y mejoraron colegios donde antes solo había abandono; se fortalecieron hospitales y centros de salud con recursos públicos; los Equipos Básicos de Salud llegaron a territorios donde el sistema nunca había estado presente, llevando atención preventiva a comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y apartadas. Miles de jóvenes de regiones históricamente excluidas encontraron nuevas oportunidades para acceder a la educación superior y construir un proyecto de vida sin verse obligados a abandonar sus territorios. Se impulsaron carreteras y obras de infraestructura que conectaron poblaciones aisladas con el resto del país. No fueron únicamente políticas públicas; fueron experiencias concretas que demostraron que el Estado podía volver a ser un instrumento para ampliar derechos y reducir desigualdades. Esa experiencia colectiva también forma parte de la disputa por la hegemonía democrática

La Reforma Agraria permitió entregar más de 350.000 hectáreas a familias campesinas, formalizar más de 2,28 millones de hectáreas e incorporar más de 800.000 hectáreas al Fondo de Tierras, el mayor avance en el acceso a la tierra en las últimas décadas.

También se avanzó en un proceso inédito de verdad y justicia. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha permitido escuchar a las víctimas, esclarecer responsabilidades y consolidar garantías para que la violencia no vuelva a repetirse. La restitución de tierras dejó de ser únicamente un procedimiento jurídico para convertirse en la reparación de la dignidad, de la memoria y de los derechos de quienes fueron expulsados de sus territorios. Son transformaciones que ya hacen parte de la conciencia democrática del país y que difícilmente podrán ser borradas.

Sin embargo, las conquistas institucionales, por importantes que sean, nunca bastan por sí solas. Gramsci advertía que la verdadera disputa se libra en la sociedad, en el terreno de la cultura, de las ideas y del sentido común. Allí se decide si los avances democráticos echan raíces o permanecen como logros pasajeros. Una elección puede abrir un camino, pero solo una ciudadanía organizada puede garantizar que ese camino continúe

La pérdida electoral no significa la derrota del proyecto democrático, pero ello exige algo más que lamentaciones. Exige autocritica. Durante meses se movilizaron multitudes, se llenaron plazas y multiplicaron mensajes en las redes sociales. Pero quizá se confundió la intensidad de la campaña con la construcción de una hegemonía social. Se descuidó el trabajo paciente de la organización territorial, de la formación política y de la creación de vínculos permanentes con la ciudadanía.

La principal lección es clara: ningún proyecto transformador puede depender únicamente del liderazgo de una persona o de una alianza electoral. Necesita convertirse en un partido movimiento con identidad propia, profundamente democrático, capaz de formar ciudadanía, articular las luchas sociales y permanecer junto a la gente mucho después de terminadas las campañas. No basta con ganar elecciones, es necesario construir una mayoría cultural que haga irreversible las transformaciones democráticas.

Eso significa volver todos los espacios donde se forma el sentido común de una sociedad. Significa escuchar más, educar más y organizar mejor. La hegemonía democrática no se decreta, se construye cotidianamente en la vida de las personas.

Gramsci hablaba del pesimismo de la inteligencia y del optimismo de la voluntad. La inteligencia nos obliga a reconocer la magnitud de los desafíos que enfrentamos. La voluntad nos recuerda que ninguna conquista social ha nacido de la resignación. Los derechos que hoy defendemos existen porque generaciones anteriores decidieron organizarse cuando parecía imposible vencer.

El horizonte puede parecer sombrío. Pero precisamente en los momentos de mayor incertidumbre es cuando la democracia necesita ciudadanos dispuestos a organizarse para defenderla. Si el autoritarismo busca sembrar miedo, nuestra respuesta debe ser más participación; si pretende dividir, nuestra respuesta debe ser más solidaridad; si intenta borrar la memoria, nuestra respuesta debe ser más verdad.

Defender el progresismo no significa aferrarse a un gobierno ni a un liderazgo individual.

Significa defender una forma de entender la política: aquella que amplía derechos, dignifica la vida de las personas y pone el Estado al servicio del bien común. Esa es la hegemonía democrática que debemos construir y proteger.

La tarea que comienza ahora es convertir esa esperanza en organización permanente. Un partido -movimiento, no como maquinaria para ganar elecciones, sino como una comunidad política profundamente democrático, arraigado en los territorios, capaz de formar ciudadanía, escuchar a las comunidades y transformar el sentido común desde abajo. Porque las elecciones se ganan o se pierden, pero la democracia solo perdura cuando un pueblo hace suyos los valores de la justicia, la igualdad y la libertad.

Hoy necesitamos el pesimismo de la inteligencia y del optimismo de la voluntad. La lucidez para comprender la magnitud del desafío y la voluntad para no renunciar a él. Mientras exista un pueblo organizado que conserve la decisión de transformar la realidad, ninguna derrota será definitiva. La verdadera hegemonía no nace del miedo ni de la imposición; nace de la conciencia colectiva de un pueblo que decide construir su propio futuro.

Ana Maria Soleibe Mejia, Bioquímica, Médica, especialista en Economía Pública y Gestión Territorial

Foto tomada de: LA Times